

La cruda realidad de una ortodoxia ideológica

KENYAN SOCIAL WATCH COALITION¹



Kenya ha emprendido la privatización sin presentar objeción ideológica alguna. Lejos de haber logrado la meta de la buena gestión de gobierno, hasta el momento la privatización ha profundizado la brecha de género, encareció el agua por encima del petróleo e impidió que los pacientes recibieran tratamiento en los hospitales. En definitiva, extendió el riesgo económico a la sociedad, mientras canalizó las ganancias económicas hacia unos pocos.

Kenya ha emprendido la privatización sin considerar el bien público de los servicios esenciales ni la ética del mercado. El fundamento ideológico que subyace en los Programas de Ajuste Estructural (PAE) es el imperativo de fomentar la participación del sector privado en el sector público/social. Esto implica la privatización de empresas estatales y/o la comercialización de los servicios públicos y sociales. En la práctica, estas políticas se implementaron sin tomar en cuenta los objetivos sociales con los cuales la mayoría de las economías anfitrionas se comprometieron sin reservas. El imperativo de la eficacia defendido de esta manera por el radicalismo neoliberal, esgrimido el poder del mercado y respaldado por la promoción de objetivos como la transparencia y la competencia, aún debe reflejarse en una ética social correspondiente.

Mientras el GATT no pudo distribuir a los pobres los beneficios económicos obtenidos con el comercio de bienes,² el GATS parece destinado a desregular y comercializar sectores de servicios esenciales, como la salud, la educación, el agua potable, la seguridad social, los recursos naturales, los servicios municipales, así como el ambiente y la cultura. Las consecuencias serán el empobrecimiento y la exclusión social.

La falta de un marco legal sustantivo

Un documento político del gobierno, *Reforma y Privatización de las Empresas Públicas*, plantea la base de la privatización seguida por el gobierno, como lo exigen las Instituciones Bretton Woods a cambio de que se le otorgue el visto bueno a su economía. Pretende señalar las modalidades, el alcance y los principios que rigen el proceso de privatización del país. Sin embargo, el marco del documento no atiende los siguientes temas e inquietudes fundamentales:

- Compromiso crítico con el fundamento ideológico de la privatización;
- Consenso público con respecto a las opciones de la privatización: licitación pública, oferta pública de adquisición, oferta pública diferida, concesión y administración por contrato, etc.;
- El grado y alcance de la participación externa;
- Procedimientos para determinar el valor de los bienes públicos a vender;
- Mandato institucional.

¹ Representada por: Edward Oyugi (Social Development Network), Oduor Ongwen (Economics Africa), Alloys Opiyo (Undugu Society of Kenya), el difunto Ooko Ombaka (Public Law Institute), Eve Odete (Action Aid Kenya), Andwio Obondo (DARAJA), Mary Wandia (FEMNET), Wahu Kaara (KENREN), Lumumba Odenda (Kenya Land Alliance), Gichira Kibara (Center for Governance and Development), Jennipher Miano (Kenya Human Rights Commission), Kangethe Mugai (People Against Torture), Churchill Suba (Education Rights Forum).

² La expansión del GATT con la Ronda Uruguay en 1994 incorporó al ámbito del sistema multilateral de comercio de la OMC a sectores hasta entonces excluidos del comercio internacional. En el mismo sentido, la liberalización dirigida a eliminar las llamadas «distorciones» producidas por la intervención del gobierno, como la investigación y el desarrollo, ha minado los objetivos sociales del desarrollo económico.

La falta de transparencia de las prácticas de favoritismo de la burocracia, en la práctica, ha aislado al proceso político de los principales interesados y de las correspondientes estructuras e instituciones democráticas de contralor. Mientras las IFI le vendieron al gobierno la idea de que la privatización es una parte inherente del buen gobierno, la buena gestión ha estado ausente del propio proceso de privatización. De hecho, la privatización extendió el riesgo económico a la sociedad, mientras canalizó las ganancias económicas hacia unos pocos.

La venta de empresas públicas a un décimo de su valor

La etapa política de la privatización de los bienes públicos se fijó en 1986 a través del Documento Sesional No. 10, *Administración Económica para un Crecimiento Renovado*. Sin embargo, el proceso no se puso en práctica hasta julio de 1992 cuando el gobierno anunció medidas para privatizar las 207 empresas públicas.

Un total de 159 firmas han sido privatizadas desde entonces. Mientras hasta el momento se recaudaron apenas KES 5.900 millones (USD 75,2 millones) con la venta de bienes públicos cuyo valor en el mercado se calcula aproximadamente 10 veces mayor, KES 4.100 millones (USD 52,2 millones) procedentes de las enajenaciones se utilizaron principalmente para saldar deudas.

La privatización de Kenya Airways dejó al gobierno con una deuda de KES 4.500 millones (USD 57,3 millones), adeudados a acreedores externos, y KES 1.600 millones (USD 20,4 millones) de deudas privadas garantizadas por el gobierno. Esto tuvo el efecto negativo de extraer recursos financieros de la prestación de los servicios sociales básicos. La privatización en curso de la Kenya Re-Insurance Company huele a estafa, ya que una empresa pública superavitaria, con un valor aproximado de KES 7.800 millones (USD 99,3 millones), será vendida por una bicoca (KES 800 millones, aproximadamente 10% de su valor) y, para peor, a grupos favorecidos por el régimen.

Educación: la brecha de género se amplía

A pesar de que el Plan Nacional de Erradicación de la Pobreza y los Documentos Estratégicos de Reducción de la Pobreza (PRSP) sostienen que con el tiempo, los costos de la Educación Primaria Universal se reducirán a niveles accesibles para todos los padres, el informe KePIM revela que éstos pagan más para mantener a sus hijos en la escuela. Este incremento se produjo debido a una andanada de medidas para compartir los costos, como los fondos de construcción y mantenimiento, incluyendo el pago por envío de correo a KES 30 (USD 0,40) por alumno en Mgombezi en el distrito de Kwale; los costos por guardias de seguridad a KES 50 (USD 0,64) en Nyasore, distrito de Gucha; los salarios de los docentes; y la enseñanza en vacaciones, como se practica en Riontweka, distrito de Gucha.³

A lo largo de la división de género, los efectos adversos del alto costo de la educación se concentran en la población femenina pobre: 29,8% sin educación, comparado con 20,8% de la población masculina pobre. La cantidad de hombres

³ Kenya Participatory Impact Monitoring (KePIM), *Perspectives of the Poor on Anti-Poverty Results from Six Piloted Districts*, p. 68.

pobres con educación primaria en 2000 ascendía a 64,7% del total, con educación secundaria al 13,6% y con educación terciaria al 1%. Las cifras correspondientes para las mujeres pobres representaban 61,1%, 8,4% y 0,1%.⁴ Esta división existe porque, ante el dilema de cuál de sus hijos deberán retirar de la escuela, muchos padres prefieren entregar a sus hijas en matrimonio a cambio de dinero para pagar la enseñanza de sus hijos varones.

Despidos e inseguridad social

La privatización se ha asociado con despidos, reducción de gastos, inseguridad social y el avance del trabajo de tiempo parcial y casual. En contra de lo que quisiera hacernos creer el Banco Mundial, el supuesto rendimiento de la economía formal en cuanto a creación de empleos sigue siendo pésimo. Si la privatización ha de reducir la pobreza, se debe suponer que el mercado laboral es capaz de absorber a los trabajadores despedidos y/o que dichas pérdidas son a corto plazo, y que la expansión subsiguiente lograda con la propiedad privada compensará la pérdida de empleo inicial. Lamentablemente, éste no parece ser el caso. Por ejemplo, desde el 4 de agosto de 2000 fueron despedidos 40 mil funcionarios, 12 mil empleados de las empresas estatales y 9.500 de las universidades públicas.

Salud: «Llévese a su esposo moribundo de aquí si no tiene dinero para pagar el hospital»

La privatización viola el espíritu de la Conferencia Mundial de Salud de OMS-UNICEF que respaldó la Declaración de Alma Alta para brindar atención médica a todos para fines de 2000. La declaración promueve los principios de que las personas tienen derecho a la salud básica y de que la sociedad tiene la responsabilidad de asegurar que las necesidades sanitarias del pueblo se satisfagan sin distinción alguna.

Entre los pobres rurales, hasta el 64% de los niños nacen en el hogar, comparado con el 47,7% entre la población no pobre. Las parteras tradicionales se han convertido en la forma más común de asistencia recibida entre los pobres (44,4%) y los no pobres (38%) en las zonas rurales. El acceso a los servicios de salud es difícil, como lo indica la proporción de partos sin asistencia, que asciende a 20,5% y 11,4% entre los pobres rurales y urbanos, respectivamente.⁵

La consecuencia más dramática de la privatización en los centros sanitarios ha sido la introducción, en 1989, de un sistema de pago previo, que exige el pago del tratamiento antes de que el paciente lo reciba. En Mtiito Andei, Makueni, se oyó que un médico le decía a una mujer que acompañaba a su esposo moribundo: «Llévese a esta persona de aquí si no tiene dinero para pagar el hospital». En Mgombezi, Kwale, donde la mayoría vive con menos de USD 1 por día, se exige un promedio de KES 100 (USD 1,27) por cada visita realizada al dispensario, o sea KES 50 para recibir una inyección (*Sindano*), KES 10 para la inscripción y el resto por la medicina (*dawa*).

Ante el incremento de la privatización, el tratamiento de pacientes con VIH/SIDA que pueden pagar, se ha convertido en un negocio lucrativo. Las disposiciones sobre patentes en el acuerdo TRIPS, a instancias de las corporaciones transnacionales, impide que los pobres con VIH/SIDA accedan a los medicamentos.

Agua: más cara que la gasolina

El 56,7% y el 59,6% de las familias pobres consiguen el agua para beber de fuentes poco seguras en la temporada seca y húmeda, respectivamente. Entre esas fuentes se encuentran agua de pozo/lluvia, agua de lagos/rios/lagunas, y agua suministrada por camiones cisterna procedente de alguno de los medios mencionados.⁷

El documento político que rige el subsector del agua es el *Documento Sesional sobre Administración de Agua*.⁸ Las prioridades atendidas en esta recomendación política son la rehabilitación de las reservas de agua existentes y la provisión de suministros accesibles, el uso de tecnologías apropiadas y el subsidio cruzado de tarifas para mejorar el acceso.

La consecuencia de que el Estado se retirara del abastecimiento de agua potable viola intrínsecamente el espíritu de su política social y, por consiguiente, descalifica el acceso al agua potable como una necesidad social.

Mientras el agua sin tratar procedente de manantiales, ríos y lagunas es gratuita (aunque posiblemente peligrosa), quienes deben adquirirla de vendedores de agua pagan entre KES 10-20 (USD 0,13-0,26) por 20 litros, según la localidad y el momento del año.⁹ En Vihiga, quienes reciben agua por cañería pagan aproximadamente KES 300 (USD 3,82), mientras los consumidores de Ngozini, Kwale, pagan KES 2,50-4 (USD 0,03-0,05) por 20 litros de agua de cañería.

Cuando un litro de agua embotellada cuesta el doble que la misma cantidad de gasolina, entonces los pobres tienen buena razón para dudar de los beneficios de la privatización de los servicios públicos comunes, debido a la combinación de las políticas de privatización y a que el gobierno no brinda el servicio público adecuado.

Consecuencias para la educación y la salud infantil

La recién promulgada Ley de la Infancia 2001 estipula, entre otras cosas, la educación básica gratuita y obligatoria para todos los niños y niñas y, en efecto, incorpora a la política nacional los principios de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y de la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño. Sin embargo, en Kenia las tasas de inscripción, retención, conclusión y transición siguen siendo inquietantemente bajas. Actualmente sólo un 68,9% de los niños asisten a la escuela primaria, un franco descenso frente al 86,9% de 1999. Eso significa que aproximadamente 32% de los niños, o sea unos 3 millones, no asisten a la escuela primaria. Peor aún, sólo un 47% concluye la escuela primaria y sólo el 40% avanza a la escuela secundaria.

El censo de población de 1999 reveló que las escuelas privadas se concentran en los principales centros urbanos, donde es mayor la cantidad de padres que pueden pagar la enseñanza particular.

Conclusiones

El objetivo de una buena gestión, cualquiera sea el sector, debería ser el de desarrollar las capacidades necesarias para lograr el desarrollo que otorgue prioridad a los pobres, fomente el progreso de la mujer, sostenga el ambiente y cree las oportunidades necesarias de empleo y otros medios de ingreso. El desarrollo humano sostenible ubica a la gente en el centro del proceso de desarrollo y hace que el principal objetivo del desarrollo sea crear un ambiente favorable donde todos puedan tener una vida extensa, sana y creativa.

La promoción del desarrollo humano sostenible exigirá nuevas formas de política, nuevas estructuras de poder y nuevas formas de expresar la resistencia contra el totalitarismo del mercado. Esto deberá reforzarse en el nuevo milenio, a medida que las luchas subalternas como las que involucran a las comunidades de Meru, Gikuyu y Maasai contra la privatización del bosque de Preservación de la Vida Silvestre Lewa Downs,¹⁰ mantienen una transformación dialógica del papel del fundamentalismo del mercado y prometen generar el cambio necesario de paradigma. ■

Referencias

- Banco Mundial, Asia Oriental. *The Road to Recovery*, citado en *Abid Aslam, World Bank Reasserts Role in Asia*, Terra Viva, Servicio Diario de InterPress Service (IPS), 30 de septiembre de 1998.
- E. Schumacher, *Small is Beautiful. A Study of Economics as if People Mattered*. Londres, 1974. <http://www.worldbank.org/html/tpd/privatesector/priv-ent.htm>
- Kenia, Ministerio de Finanzas y Planeamiento. *Kenya Participatory Impact Monitoring (KePIM): Perspectives of the Poor on Anti-Poverty Results from Six Piloted Districts*. Nairobi, enero de 2002.
- Kenia, Ministerio de Finanzas y Planeamiento. *Second Report on Poverty in Kenya Vol. II Poverty and Social Indicators*. Nairobi, noviembre de 2000.
- M.P. Todaro, *1994 Economic Development* (5th Edition), New York: Longman.
- National Aids Control Council.
- PNUD, *Informe sobre Desarrollo Humano 2002*.
- PNUD, *Informe sobre Desarrollo Humano en Kenia 2001*.
- República de Kenia, *Child Labour Report 2001*.

Kenyan Social Watch Coalition (KSWC)
<info@sodnet.or.ke>

4 Second Report on Poverty in Kenya Vol. II, *Poverty and Social Indicators*.

5 *Ibid.*

6 Kenya Participatory Impact Monitoring (KePIM), *op. cit.*, p. 45.

7 Second Report on Poverty in Kenya Vol. II, *op. cit.*

8 Gobierno de Kenia (1999a) *Sessional Paper No. 1 on Water Resource Management and Development*.

9 El precio más bajo, en Nyansore, Gucha fue de KES 10, y el más alto, en Elwak, Mandera fue de KES 25.

10 *The Daily Nation*, 22 de agosto de 2002, Nairobi, Kenia, p. 19-20.